

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL
BOGOTÁ D.C.**

Bogotá D.C., veintitrés
mil veinte (2020).



(23) de octubre de dos

CLASE DE PROCESO	: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE	: AUTOS GUERREROS S.A.S
ACCIONADO	: BANCOLOMBIA
RADICACIÓN	: 11001 40 03 035 2020 00598 00

En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, procede el Despacho a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia, como quiera que el trámite propio de la instancia se encuentra agotado, sin la presencia de causal que invalide lo actuado.

I. ANTECEDENTES

Auto Guerreros S.A.S. presentó acción de tutela contra **Bancolombia**, solicitando el amparo de su derecho fundamental a la petición.

La *causa petendi* de la acción se fundamenta en los hechos que de manera concisa se citan a continuación:

1.1. Señala la Sociedad actora haber presentado petición ante la accionada el día 28 de julio hogaño. La misma, en términos generales, estaba relacionada sobre la pignoración y retención de dineros respecto de un producto del establecimiento bancario.

1.2. El 19 de agosto de 2020, **Bancolombia** acusó el recibo de la petición, fijando el 14 de septiembre del año en curso como límite para dar respuesta al escrito presentado.

1.3. Pese a lo anterior, vencidos los términos legales, la accionada no ha dado respuesta a la petición presentada. Incluso, también venció el plazo solicitado por la misma Entidad.

1.4. Se adiciona que, debido a la retención de dineros y pignoración de productos, se ha vulnerado su derecho al debido proceso y que esto, incluso, no se ha solucionado pese a requerimiento previos múltiples.

II. TRASLADOS Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

Una vez admitida la acción de tutela mediante auto de 09 de octubre de 2020, se ordenó la notificación de la Entidad Bancaria accionada, a efectos de que ejerciera su derecho de defensa sobre los hechos alegados.

2.1.- Bancolombia

Surtida su vinculación en debida forma, la accionada guardó silencio respecto de los hechos alegado en su contra en el libelo inicial.

III. CONSIDERACIONES

3.1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA:

El artículo 86 de la Constitución Política prevé que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La tutela tiene como dos de sus caracteres distintivos esenciales la subsidiariedad y la inmediatez; el primero por cuanto tan solo resulta procedente instaurar la acción cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable; el segundo puesto que no se trata de un proceso sino de un remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad, concreta y actual del derecho sujeto a violación o amenaza.

3.2. DEL CASO EN CONCRETO.

Según los supuestos fácticos que soportan esta acción, la promotora solicita se dé respuesta a la petición por ella presentada. Por esto, pese anunciarse distintos derechos, se tomará el enfoque desde la garantía del art. 23 Superior, pues esta basta para la resolución del caso.

Atendiendo lo anterior, recuérdese que la Constitución prevé la posibilidad de elevar peticiones ante entidades públicas o particulares encargados de la prestación de un servicio público servicios públicos. A efectos de garantizar la protección y efectividad del derecho de petición, se exige que la solicitud presentada sea resuelta de manera oportuna. Ante la carencia de tal respuesta, se vería infringida la garantía del art. 23 superior.

Al respecto, también ha reiterado el alto Tribunal Constitucional, a través de sus Salas de Revisión, lo siguiente en cuanto al derecho de petición:

El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Carta, es un derecho público subjetivo de la persona para acudir ante las autoridades, o las organizaciones privadas que establezca la ley, con miras a obtener pronta resolución a una solicitud o queja. A diferencia de los términos y procedimientos jurisdiccionales, el derecho de petición es una vía expedita de acceso directo a las autoridades. Aunque su objeto no incluye el derecho a obtener una resolución determinada, sí exige que exista un pronunciamiento oportuno.¹

El derecho de petición escrito, regulado en la Ley 1755 de 2015, estableció los términos a efectos de dar respuesta a una petición así:

¹ Sentencia T 426 de 1992 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

Igualmente, ha considerado la jurisprudencia constitucional que la respuesta no es una cualquiera, sino que esta debe reunir unos determinados requisitos, a fin de entenderse como garantizada el derecho fundamental a la petición. Las características en mención, se pueden concluir como oportunidad, resolución de fondo, de manera clara y congruentemente, y que dicha respuesta sea efectivamente notificada a la parte petente; al respecto, la sentencia T 149 de 2013, con ponencia del Magistrado Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez, destacó lo siguiente:

4.5.1. En relación con los tres elementos iniciales- **resolución de fondo, clara y congruente-, la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.** Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.

Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la respuesta dada.

4.5.2. Respecto de la **oportunidad de la respuesta**, como elemento connatural al derecho de petición y del cual deriva su valor axiológico, **ésta se refiere al deber de la administración de resolver el ruego con la mayor celeridad posible, término que en todo caso, no puede exceder del estipulado en la legislación contencioso administrativa para resolver las peticiones formuladas.**

[...]

4.5.3. Asimismo, **el derecho de petición solo se satisface cuando la persona que elevó la solicitud conoce la respuesta del mismo.** Significa que ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar la respuesta al interesado.

Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio, examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo significado supera la

simple adopción de una decisión para llevarla a conocimiento directo e informado del solicitante.

4.6. De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.

4.6.1. Sobre la obligación y el carácter de la notificación, debe precisarse en primer lugar, que esta debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante.

4.6.2. Esta característica esencial, implica además que la responsabilidad de la notificación se encuentra en cabeza de la administración, esto es, que el ente al cual se dirige el derecho de petición está en la obligación de velar porque la forma en que se surta aquella sea cierta y seria, de tal manera que logre siempre una constancia de ello.

La constancia que logre obtener la entidad de la notificación de su respuesta al peticionario, constituye la prueba sobre la comunicación real y efectiva que exige la jurisprudencia para perfeccionar el núcleo esencial del derecho de petición, desde luego, siempre que la respuesta se ajuste a las exigencias que líneas atrás fueron desarrolladas. (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Descendiendo al caso objeto de estudio, se aprecia que el 28 de julio de 2020, la accionante radicó petición ante **Bancolombia**. Situación que, además, no fue controvertida por el extremo pasivo. En el referido documento se solicitaba información sobre una pignoración realizada sobre un producto ofrecido por la accionada y, también, el motivo de no haber informado dicho dato.

Señalado ello, en revisión del plenario, denota la ausencia de constancia alguna que la accionada haya emitido respuesta de manera oportuna y la misma haya sido puesta en conocimiento de **Autos Guerrerros S.A.S.**, *máxime*, cuando a la fecha se encuentra vencido el plazo legal para emitir la respuesta correspondiente.

Adicional a lo ya dicho, los hechos alegados por la solicitante del amparo de tutela, no fueron desvirtuados por **Bancolombia**; en el término concedido para que ejerciera la defensa, esta guardó silencio respecto de los hechos génesis de la presente acción. Por ello, hay lugar a la presunción de veracidad² prevista en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.

Por tanto y sin mayor análisis, teniendo en cuenta de igual manera que ha vencido el término perentorio para dar respuesta al derecho de petición, siendo este fijado en veinte (25) en lo relativo a solicitud de información, según el Dto. 491 de 2020 y, ante la omisión de respuesta al escrito de **Autos Guerrero S.A.S.**; se ordenará a **Bancolombia**, por intermedio de su representante legal, o quien haga sus veces, para que en el término perentorio de cuarenta y ocho horas –contadas a partir de

² **Corte Constitucional T-658 de 2004, "Presunción de veracidad en materia de tutela cuando el demandado no rinde el informe solicitado por el juez.** El despacho judicial que conoció del asunto, corrió traslado de la demanda a la entidad accionada para que ésta ejerciera el derecho de defensa, sin que la misma se haya pronunciado sobre el asunto. Cabe aclarar, que cuando la autoridad pública contra la que se dirige la acción no contesta el requerimiento que le hace el juez de instancia con el fin de que dé contestación a los hechos expuestos en la tutela, ni justifica tal omisión, opera para el caso, la presunción de veracidad de los hechos narrados por el accionante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del decreto 2591 de 1991."

la notificación de la presente-, proceda a dar respuesta a la petición presentada el 28 de julio de 2020 y que tal contestación sea efectivamente notificada a la accionante.

Haciendo la salvedad a la parte accionante respecto de la respuesta, que aquella "no implica la respuesta favorable a las pretensiones del solicitante"³.

IV. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Treinta y Cinco Civil Municipal de Bogotá D. C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley;

RESUELVE:

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición vulnerado a **Autos Guerreros S.A.S.** por parte de **Bancolombia**, por las razones expuestas en la parte motiva de éste proveído.

SEGUNDO: ORDENAR a **Bancolombia**, por intermedio de su representante legal, o quien haga sus veces, para que en el término perentorio de cuarenta y ocho horas –contadas a partir de la notificación de la presente-, proceda a dar respuesta a la petición presentada el 28 de julio de 2020 y que tal contestación sea efectivamente notificada a la accionante.

TERCERO: ORDENAR la notificación de lo aquí resuelto a las partes por el medio más expedito y eficaz de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 16 del decreto 2591 de 1991.

CUARTO: DISPONER la remisión de lo actuado ante la Honorable Corte Constitucional, en caso de no ser impugnada esta providencia.

Notifíquese y cúmplase.

DEISY ELISABETH ZAMORA HURTADO
JUEZA

DS/LC

Firmado Por:

³ Sentencia T 464 de 1996, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo

DEISY ELIZABETH ZAMORA HURTADO
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 035 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fa85e05290d9b27a7d0e095b5987a62068b1fc4f14619e7f210d042134d029**

Documento generado en 26/10/2020 08:44:31 a.m.

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL
BOGOTÁ D.C.**



Bogotá DC., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020).

Incidente de Desacato No. 11001 40 03 035 2020 00598 00

Previo a iniciar el incidente de desacato previsto en el art. 52 del Decreto 2591 de 1991, se requiere al representante legal de la entidad accionada, **Bancolombia**, para que manifieste si dio cumplimiento al fallo de tutela emanado por este Despacho, e igualmente informe qué persona dentro de esa entidad, es la responsable del cumplimiento del fallo de tutela individualizándola, además informar el nombre de su superior jerárquico. Si es del caso, indicar los nombres y lugares de domicilio y residencia de dichas personas. En el escrito de contestación, el representante legal deberá acreditar dicha calidad mediante el certificado de existencia y representación legal de la entidad accionada con fecha de expedición vigente.

De lo anterior se le concede el término de tres (3) días siguientes a la notificación del presente auto, so pena de incurrir en desacato con las consecuencias legales indicadas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

En el acto de notificación personal que se realice al aludido representante legal, suminístresele copia del citado fallo.

Esta providencia se debe **NOTIFICAR POR EL MEDIO MÁS EXPEDITO.**

Cúmplase,

La Jueza,

DEISY ELISABETH ZAMORA HURTADO

Firmado Por:

**DEISY ELIZABETH ZAMORA HURTADO
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 035 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **6bd2488ed3ed301deae48c40ed697013859e3a5d4acb86fc3c7c89409b873537**

Documento generado en 25/11/2020 05:03:31 p.m.

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL
BOGOTÁ D.C.**



Bogotá DC., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020).

Incidente de Desacato No. 11001 40 03 035 2020 00598 00

En atención a la anterior comunicación enviada por la entidad incidentada, se le concede a la parte accionante un término de tres (3) días siguientes a la notificación de este auto, para que haga las manifestaciones a que haya lugar, so pena de abstenerse este estrado judicial de continuar el trámite incidental solicitado. Comuníquese por el medio más expedito.

Cúmplase,

La Jueza,

DEISY ELISABETH ZAMORA HURTADO

DS

Firmado Por:

**DEISY ELIZABETH ZAMORA HURTADO
JUEZ MUNICIPAL**

JUZGADO 035 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **3d49c63a6c9771098c1f1fd9153cf5200a1a25b70aa4d6f36b4d30af1950ee0c**

Documento generado en 16/12/2020 03:10:56 p.m.

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL
BOGOTÁ D.C.**



Bogotá DC., cuatro (04) de febrero de dos mil veintiuno (2021).

Incidente de Desacato No. 11001 40 03 035 2020 00598 00

En atención a la anterior comunicación enviada por la entidad incidentada, se le concede a la parte accionante un término de tres (3) días siguientes a la notificación de este auto, para que haga las manifestaciones a que haya lugar, **so pena de abstenerse este estrado judicial de continuar el trámite incidental solicitado**. Comuníquese por el medio más expedito.

Cúmplase,

La Jueza,

DEISY ELISABETH ZAMORA HURTADO

DS

Firmado Por:

DEISY ELIZABETH ZAMORA HURTADO
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 035 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ac538599490f0e4c38f30c2878259a34bbafa6da96108ba61e73c38069ef640f**

Documento generado en 04/02/2021 02:01:21 PM

**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TREINTA Y CINCO CIVIL MUNICIPAL
BOGOTÁ D.C.**



Bogotá DC., diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021).

Incidente de Desacato No. 11001 40 03 035 2020 00598 00

I-. OBJETO POR DECIDIR

Lo constituye el incidente de desacato promovido por **Autos Guerreros S.A.S.** en contra de **Bancolombia**; tal situación, ante el no cumplimiento, por parte de la accionada, a la orden de tutela impartida por este Despacho en sentencia proferida el 23 de octubre de 2020.

II-. ANTECEDENTES

Manifiesta la Sociedad actora que **Bancolombia** no ha dado o emitido respuesta que decida de fondo el derecho de petición por ella presentado, el cual fue tutelado mediante el fallo que se rememora.

III-. RAZONAMIENTOS QUE FUNDAMENTAN LA CONCLUSIÓN

a-. Marco de la decisión

Análisis de las explicaciones dadas por la accionada para, a partir de ellas, disponer la apertura o no del incidente.

b-. Consideraciones

Una vez recibido el escrito de incidente de desacato, se dispuso requerir a la entidad accionada para que manifestara si se había dado cumplimiento al fallo calendado 23 de octubre de 2020. En atención al requerimiento hecho, **Bancolombia** señaló que el 03 de noviembre de ese mismo año se dio contestación a la petición a ellos presentada. La misma fue remitida al correo informado por la interesada.

Sobre el particular, se añadió que, ahora, la Sociedad accionante presenta nuevos cuestionamientos, los cuales escapaban a la solicitud inicialmente radicada y que, en su momento, fue objeto de análisis en sede de tutela.

Del escrito presentado se dio traslado a la accionante, quien indicó que la respuesta dada no era acorde con lo solicitado a la Entidad Bancaria enjuiciada y, por lo tanto, se conculcaba el derecho consagrado en el art. 23 superior.

Dicho lo anterior, conforme las pruebas documentales arrimadas al trámite incidental, el Despacho encuentra que el motivo base de la acción

tuitiva ha cesado. En efecto, fue remitido a este Despacho la respuesta dada a la petición presentada inicialmente por **Autos Guerrero S.A.S.**; en relación a ello, la respuesta dada suple los requisitos jurisprudenciales de resolución de fondo del problema planteado, claridad y congruencia.

Al respecto, **Bancolombia** procedió a relacionar uno a uno lo cuestionamiento elevados por la Sociedad actora y, en tales términos, dio respuesta a los mismos. En términos generales, la ahora incidentada señaló el motivo de los problemas con los movimientos bancarios de la petente y la solución que los mismos tuvieron.

Con base a lo señalado, el desacato presentado se ve desnaturalizado; a través de su ejercicio, se pretende revertir la respuesta dada al derecho de petición o, como lo señalaba en el libelo inicialmente presentado, generar nuevos interrogantes a la Entidad Bancaria; respuesta la cual da cumplimiento al fallo proferido pretéritamente.

Por tal, este Estrado Judicial se abstendrá de dar apertura al incidente de desacato presentado. Debe resaltarse que el objeto del incidente de desacato, en últimas, es el cumplimiento del fallo y sanción al responsable de su no acatamiento; empero, habiéndose dado cumplimiento al fallo de tutela del 23 de octubre de 2021, *<<pierde razón cualquier orden que pudiera impartirse, que ningún efecto produciría, al no subsistir conculcación o amenaza alguna que requiriere protección inmediata>>¹.*

Por lo expuesto, el Juzgado Treinta y Cinco Civil Municipal de Bogotá,

R E S U E L V E:

PRIMERO: ABSTENERSE de dar trámite al incidente de desacato planteado por **Autos Guerreros S.A.S.** en contra de **Bancolombia**.

SEGUNDO: NOTIFICAR de esta decisión a las partes de la manera más expedita. Secretaría proceda de conformidad.

TERCERO: Se ordena **ARCHIVAR** las diligencias.

Notifíquese y Cúmplase,

La Jueza,

DEISY ELISABETH ZAMORA HURTADO

DS

Firmado Por:

¹ Sentencia T 094 de 2014, Magistrado Ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla.

DEISY ELIZABETH ZAMORA HURTADO
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 035 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **140b55b83fec7c83edd48486a939f1babd0ff5ed880487aa8a1cecc6f59263ce**

Documento generado en 10/02/2021 03:33:05 PM